



**RESOLUCION No. CSJATR18-289**  
**Viernes, 11 de mayo de 2018**

Por medio de la cual se resuelve queja de Vigilancia Judicial Administrativa impetrada por el Dr. Luis Francisco Frías Suarez contra el Juzgado Tercero Promiscuo Municipal de Sabanalarga - Atlántico.

Radicado No. 2018 – 00170 Despacho (02)

**Solicitante:** Dr. Luis Francisco Frías Suarez.

**Despacho:** Juzgado Tercero Promiscuo Municipal de Sabanalarga - Atlántico.

**Funcionaria (o) Judicial:** Dr. Rafael Ángel Carrillo Pizarro.

**Proceso:** 2017 - 00175.

**Magistrada Ponente:** Dra. OLGA LUCIA RAMIREZ DELGADO.

**El Consejo Seccional de la Judicatura del Atlántico.**

En uso de las facultades conferidas en el numeral 6 del Artículo 101 de la Ley 270 de 1996, Ley Estatutaria de la Administración de Justicia y el Acuerdo PSAA 8716 de 2011 de la entonces Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, procede a emitir resolución dentro de la vigilancia con radicado 2018 - 00170 con fundamento en lo siguiente:

**I - RESEÑA DEL CASO**

El presente trámite se inicia en atención a petición instaurada por el Dr. Luis Francisco Frías Suarez, quien en su condición de apoderado judicial de la parte accionante dentro de la acción de tutela distinguida con el radicado 2017 – 00175 el cual se tramita en el Juzgado Tercero Promiscuo Municipal de Sabanalarga - Atlántico, solicita Vigilancia Judicial Administrativa del proceso en referencia, al considerar que ha existido un retardo, por parte del referido despacho judicial vinculado en pronunciarse sobre el trámite de incidente presentado dentro de la acción constitucional relacionada.

La solicitud de vigilancia fue recibida en este Consejo Seccional, el 25 de abril de 2018 y es necesario proferir decisión en atención a la petición instaurada.

**II - COMPETENCIA**

**La competencia** para adelantar el trámite de vigilancia judicial está asignada a la Sala Administrativa de los Consejos Seccionales de la Judicatura en el numeral 6 del artículo 101 de la Ley 270 de 1996, Ley Estatutaria de la Administración de Justicia y conforme al artículo 2º del Acuerdo No. PSAA16-10559 del 9 de agosto de 2016, las Salas Administrativas de los Consejos Seccionales se denominarán en adelante Consejos Seccionales de la Judicatura, situación que no afecta las competencias establecidas con anterioridad en la Ley y reglamentos, luego este Consejo Seccional de la Judicatura, es competente para emitir la decisión conforme al Acuerdo PSAA11-8716 de 2011, en consideración a que la petición de vigilancia se refiere al trámite de un expediente cuyo

conocimiento y etapas procesales adelanta un funcionario judicial, adscrito a la circunscripción territorial corresponde al Distrito Judicial de Barranquilla. El artículo primero del Acuerdo antes citado que reglamenta la vigilancia judicial administrativa determina lo siguiente:

**“Competencia.** De conformidad con el numeral 6° del artículo 101 de la Ley 270 de 1996, corresponde a la Sala Administrativa de los Consejos Seccionales de la Judicatura del país, ejercer la Vigilancia Judicial Administrativa para que la justicia se administre oportuna y eficazmente, y cuidar del normal desempeño de las labores de funcionarios y empleados de los despachos judiciales ubicados en el ámbito de su circunscripción territorial....

*La vigilancia judicial es diferente de la acción disciplinaria a cargo de las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias de los Consejos Seccionales de la Judicatura y de la facultad de Control Disciplinario de la Procuraduría General de la Nación.”*

### III – TRAMITE

Constituye premisa normativa dentro del presente trámite, el Acuerdo PSAA11-8716 del 2011 expedido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, reglamento de carácter permanente orientado a garantizar que la labor de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial se ejerza de manera oportuna y eficaz, trámite que bien puede iniciarse de oficio o a petición de la parte que aduzca interés legítimo y debe recaer sobre acciones u omisiones específicas en procesos singularmente determinados (Artículo tercero del PSAA11-8716)

El procedimiento para adelantar vigilancia administrativa, se describe en el artículo segundo del citado Acuerdo, indicando los siguientes pasos:

- a) *Formulación de la solicitud;*
- b) *Reparto;*
- c) *Recopilación de la información;*
- d) *Apertura, traslado y derecho de defensa;*
- e) *Proyecto de decisión;*
- f) *Notificación y recurso;*
- g) *Comunicaciones.*

Conforme a lo anterior, en cuanto a la actuación adelantada en este Consejo Seccional, se evidencia que luego de recibir la queja el 25 de abril de 2018, se dispone repartir la respectiva solicitud, correspondiéndole su conocimiento y trámite a este Despacho; seguidamente se decide recopilar la información en auto del 3 de mayo de 2018; en consecuencia se remitió oficio número CSJATAVJ18-568 vía correo electrónico el mismo día, dirigido al **Dr. Rafael Ángel Carrillo Pizarro**, Juez Tercero Promiscuo Municipal de Sabanalarga - Atlántico, solicitando informes bajo juramento sobre la actuación procesal dentro del proceso distinguido con el radicado 2017 - 00175, poniendo de presente el contenido de la queja.

Dentro del término concedido por esta Corporación al Juez Tercero Promiscuo Municipal de Sabanalarga – Atlántico para que presentara sus descargos, el funcionario judicial allegó respuesta en oficio de fecha 09 de marzo de 2018, recibido en la Secretaría de esta Corporación el 12 del mismo mes y año en el que se argumenta lo siguiente:

*RAFAEL ANGEL CARRILLO PIZARRO, en mi calidad de Juez Tercero Promiscuo Municipal Oralidad de Sabanalarga, concuro a su despacho a efecto de rendir el informe que me fue solicitado dentro de la vigilancia administrativa indicada en la referencia.*

*En cuanto al hecho primero, efectivamente a este despacho judicial le correspondió tramitar la acción de tutela presentada por VICENTE EMILIO MACHACON Y OTROS contra ELECTRIFICADORA DEL CARIBE, ELECTRICARIBE S.A. ESP radicada 130 de 2.017.*

*En cuanto al hecho segundo, tal como lo narra el accionante las pretensiones de la tutela fueron negadas al considerar este despacho que los accionantes no son titulares del derecho reclamado, pues aquel todavía está en discusión. Tampoco se encontró demostrada la afectación al mínimo vital, ni el cumplimiento de los requisitos básicos de procedibilidad, subsidiariedad e inmediatez. :*

*Los hechos 3 y 4 son ciertos.*

*En cuanto al quinto hecho es cierto, en fecha 15 de agosto de 2017 el personero de Sabanalarga allegó escrito a este despacho solicitando se requiriera al señor JAVIER LASTRA FUSCALDO, designado por la Superintendencia de servicios públicos como agente especial para la intervención con fines liquidatorios de Electricadora del Caribe S.A E.S.P para que cumpliera con lo resuelto en la alzada por el Juez Tercero Promiscuo del Circuito de Sabanalarga.*

*El hecho sexto es cierto, en fecha 17 de Agosto de 2.017 el doctor LUIS FRANCISCO FRIAS SUAREZ en su calidad de apoderado de los accionantes puso de presente el incumplimiento del fallo de tutela por parte de la accionada.*

*Por auto de fecha 29 de Septiembre de 2.017 este despacho dispuso desvincular del trámite incidental a los señores Heday de Jesús Consuegra Orozco y Juan Pablo Guerrero Sánchez, y vincula al doctor JUAN SÁNCHEZ CURIEL; Se dispuso de igual forma requerir al doctor JAVIER LASTRA FUSCALDO.*

*El doctor JUAN SÁNCHEZ CURIEL, representante legal de Electricaribe en asuntos laborales compareció al trámite contestando, que a Electricaribe le es imposible física y materialmente cumplir la orden de tutela toda vez que se trata de obligaciones causadas con anterioridad a la toma de posesión.*

*En fecha 7 de marzo de 2.018 el doctor LUIS FRANCISCO FRIAS SUAREZ solicitó se apresurará incidente de desacato.*

*Por auto de fecha 30 de Abril de 2.018 se ordenó apertura incidente de desacato, ordenándose el traslado a los señores JUAN SÁNCHEZ CURIEL y JAVIER LASTRA FUSCALDO, para cuyo efecto se ordenó conminar a la parte incidentalista para que aporte los traslados pertinentes, toda vez que estos no pueden ser reproducidos por el despacho, dado el volumen de los mismos.*

*Debo indicar finalmente, que una vez la parte interesada en este trámite de incidente de desacato aporte los traslados requeridos se surtirán las notificaciones a los accionados.*

*Es de cardinal importancia ponerle de presente, que esta tutela fue seleccionada por la Corte Constitucional para su revisión atendiendo la complejidad de caso.*

Seguidamente, esta Judicatura, procedió a revisar los documentos que acompañan los descargos presentados por el **Dr. Rafael Ángel Carrillo Pizarro**, Juez Tercero Promiscuo Municipal de Sabanalarga - Atlántico, constatando la expedición del proveído de fecha 30 de abril de 2018, actuación que será estudiada dentro del presente trámite.

#### IV – PROBLEMA JURÍDICO

Según lo expuesto el **problema jurídico** que se presenta se refiere a determinar si de conformidad con los hechos planteados se ha cometido falta contra la eficacia de la administración de justicia que amerite disponer apertura de Vigilancia Judicial y si es procedente disponer los efectos indicados en el Acuerdo PSAA11-8716 del 2011, expedido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, en el trámite del proceso 2017 - 00130.

#### V – CONSIDERACIONES

Al describir el marco normativo de la Vigilancia judicial, es necesario observar que constituye normatividad rectora en el presente trámite, el Acuerdo No. PSAA11-8716 de 2011 expedido la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y conforme a la reglamentación allí establecida, corresponde a este Consejo emitir decisión debidamente motivada *“sobre si ha habido un desempeño contrario a la administración oportuna y eficaz de la justicia”* en el preciso y específico proceso o actuación judicial que se trata, así se indica en el artículo séptimo del Acuerdo en cita, siguiendo los parámetros trazados en la Ley Estatutaria de la administración de justicia, artículo 101 numeral 6, en relación con el artículo 4 de la misma Ley, siguiendo los lineamientos del art 228 de la Constitución Nacional.

Según lo anterior, en el ejercicio de la vigilancia judicial, se resalta en el artículo primero del Acuerdo PSAA11-8716 de 2011, el principio de celeridad, al establecer que precisamente su ejercicio tiene por objeto que la justicia se administre de manera oportuna y eficaz. Se pretende con ello en consecuencia eliminar retrasos injustificados y obtener el ejercicio de una justicia pronta y cumplida en beneficio de quienes acuden en calidad de usuarios a los estrados judiciales, para obtener el cumplimiento efectivo del deber plasmado en el artículo 4 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la administración de justicia, modificado por el artículo primero de la Ley 1285 de 2009, según la cual *“la administración de justicia debe ser pronta y cumplida y eficaz en la solución de fondo de los asuntos que se sometan a su conocimiento”*.

En este orden de ideas, la vigilancia judicial de carácter administrativo hace especial énfasis en la necesidad de verificar la *“oportunidad y eficacia de la administración de justicia”*, siguiendo los lineamientos constitucionales establecidos en el artículos 228 de la Constitución Política que expresa:

*“Artículo 228: “La administración de Justicia es función pública. Sus decisiones son independientes. Las actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la Ley y en ellas prevalecerá el Derecho sustancial. Los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado. Su funcionamiento será desconcentrado y autónomo. (Subraya para resaltar la idea)*

Además, la misma Constitución da directrices encaminadas a reglar la eficacia de la administración de justicia cuando indica:

*Artículo: 257: “Con sujeción a la ley, el Consejo Superior de la judicatura cumplirá las siguientes funciones:*

*(...) 3. Dictar los reglamentos necesarios para el eficaz funcionamiento de la administración de justicia, (...)*

De manera consecuente con la directiva anterior, a fin de ampliar el análisis jurídico de las disposiciones que rige el trámite de vigilancia en referencia, se impone considerar los lineamientos establecidos en el artículo 101, numeral 6 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia que señala:

*"Las Salas Administrativas de los Consejos Seccionales de la Judicatura tendrán las Siguiete funciones:*

*...6. Ejercer la vigilancia judicial para que la justicia se administre oportuna y eficazmente y cuidar del normal desempeño de las labores de funcionarios y empleados de esta Rama",*

La disposición transcrita, fue reglamentada mediante Acuerdo No. PSAA11-8716 expedido el 6 de octubre de 2011 por la otrora Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, en el cual además de propender por la eficacia de la Administración de justicia, de manera expresa se resalta el deber de respetar la independencia judicial como principio esencial de la administración de justicia, siguiendo así la orientación Constitucional establecida en el artículo 228 de la Carta Fundamental y la directriz Estatutaria establecida en la Ley 270 de 1996 en su artículo quinto.

El reglamento de la vigilancia judicial de manera particular indica en el artículo catorce del Acuerdo No. PSAA11-8716 de 2011, lo siguiente:

*"Independencia y Autonomía Judicial. En desarrollo de las actuaciones de vigilancia judicial administrativa, los Magistrados de la Sala Administrativa competente deberán respetar la autonomía e independencia de los funcionarios, de tal suerte que en ningún caso podrán sugerir el sentido en que deben proferir sus decisiones."*

El principio de independencia judicial, no solo se resalta en la disposición transcrita, sino que de manera específica la Circular PSAC 10-53 del 10 de diciembre de 2010 emitida por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, indica:

*"(...) al analizarse la competencia atribuida en el artículo 101 numeral 6 de la Ley 270 de 1996 a los Consejos Seccionales, es claro que apunta exclusivamente a que se adelante un control de términos, en aras de velar por una administración de justicia oportuna y eficaz, sin que de manera alguna se pueda utilizar este mecanismo para ejercer una indebida presión sobre los funcionarios judiciales, o para influir en el sentido de sus decisiones. No podrán por tanto los Consejos Seccionales- Salas Administrativas- indicar o sugerir el sentido de las decisiones judiciales, la valoración probatoria, la interpretación o aplicación de la Ley y en fin nada que restrinja su independencia judicial en el ejercicio de su función judicial."*

Se resalta en la Circular antes citada, lo preceptuado en el artículo 228 de nuestra Carta Fundamental, según el cual se imprime especial protección al principio de independencia judicial, siguiendo orientación de Normas Internacionales, entre ellas: la Declaración Universal de Derechos Humanos (art.10), el Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos, (Art.14), La convención Americana de Derechos Humanos (art. 8.1) y el Estatuto del Juez Iberoamericano (artículos 1, 2, y 4).

En torno a la eficacia y eficiencia, habrá de entenderse siguiendo los lineamientos del Sistema Integrado de Gestión de Calidad, el deber de impartir pronta y cumplida justicia, mediante la racionalización de elementos disponibles y la aplicación de procedimientos legales correspondientes, pretendiéndose obtener con ello una reducción en los niveles de atraso, el efectivo cumplimiento de la gestión judicial y el tramite oportuno de cada etapa procesal, dándose un cumplimiento efectivo a los términos judiciales.

- **De Las Pruebas Aportadas Por Las Partes:**

Al estudiar la solicitud de Vigilancia Judicial Administrativa suscrita por el Dr. Luis Francisco Frías Suarez, quien en su condición de apoderado judicial de la parte accionante dentro de la acción de tutela distinguida con el radicado 2017 – 00175 el cual se tramita en el Juzgado Tercero Promiscuo Municipal de Sabanalarga - Atlántico, aportó como prueba los siguientes documentos:

- Copia de fallo de segunda instancia.
- Solicitud de cumplimiento hecha por el personero de Sabanalarga Dr. Cesar Llinas Colon.
- Solicitud de cumplimiento de fallo elevada por el apoderado de los accionantes.
- Auto de fecha 1 de septiembre de 2017.
- Copia del auto de fecha 05 de septiembre de 2017.
- Copia del auto 29 de septiembre de 2017.
- Solicitud de apertura del incidente de desacato hecha por el apoderado de los accionantes.
- Solicitud de coadyuvancia elevada ante la procuraduría general de la nación.

Por otra parte el **Dr. Rafael Ángel Carrillo Pizarro**, Juez Tercero Promiscuo Municipal de Sabanalarga - Atlántico, al momento de presentar sus descargos, allego los siguientes documentos:

- Copia simple de providencia de 30 de abril de 2018, por medio del cual abre a trámite el Incidente de Desacato promovido por el señor Jhan Alberto Martínez Bolívar, entre otras disposiciones.

- **Del Caso Concreto:**

Según lo anterior se procede a emitir **consideraciones finales** en torno al análisis de la queja presentada el pasado 25 abril de 2018 por el Dr. Luis Francisco Frías Suarez, quien en su condición de apoderado judicial de la parte accionante dentro de la acción de tutela distinguida con el radicado 2017 – 00175 el cual se tramita en el Juzgado Tercero Promiscuo Municipal de Sabanalarga - Atlántico, en la que aduce la existencia de una mora en el actuar por parte del juzgado relacionado dentro del proceso de su interés, con relación al considerar que ha existido un retardo, por parte del referido despacho judicial vinculado en pronunciarse sobre el trámite de la solicitud de apertura de incidente de desacato mediante escrito del 7 de marzo de 2018.

Sin embargo, con base en lo expuesto en los descargos allegados por parte el **Dr. Rafael Ángel Carrillo Pizarro**, Juez Tercero Promiscuo Municipal de Sabanalarga - Atlántico, los cuales se considera rendidos bajo la gravedad del juramento, manifiesta que mediante auto de 30 de abril de 2018, repuso el auto atacado y dispuso la admisión de la demanda.

Es necesario observar lo dicho por la Corte Constitucional, en fallo de Tutela T-230 del 13 de abril de 2013 indico: *“No obstante, la jurisprudencia también ha señalado que, atendiendo la realidad del país, en la gran mayoría de casos el incumplimiento de los términos procesales no es imputable al actuar de los funcionarios judiciales. Así, por ejemplo, existen procesos en los cuales su complejidad requiere de un mayor tiempo del establecido en las normas y en la Constitución para su estudio, para valorar pruebas o*

*para analizar la normatividad existente. Por ello, la jurisprudencia ha destacado que cuando la tardanza no es imputable al actuar del juez o cuando existe una justificación que explique el retardo, no se entienden vulnerados los derechos al debido proceso y al acceso a la administración de justicia”.*

En el mismo sentido, la Corte Constitucional en sentencia T-803 de 2012, señaló: *luego de hacer un extenso recuento jurisprudencial sobre la materia, esta Corporación concluyó que el incumplimiento de los términos se encuentra justificado (i) cuando es producto de la complejidad del asunto y dentro del proceso se demuestra la diligencia razonable del operador judicial; (ii) cuando se constata que efectivamente existen problemas estructurales en la administración de justicia que generan un exceso de carga laboral o de congestión judicial; o (iii) cuando se acreditan otras circunstancias imprevisibles o ineludibles que impiden la resolución de la controversia en el plazo previsto en la ley. Por el contrario, en los términos de la misma providencia, se está ante un caso de dilación injustificada, cuando se acredita que el funcionario judicial no ha sido diligente y que su comportamiento es el resultado de una omisión en el cumplimiento de sus funciones.*

Lo anterior no obsta para recordar el deber de atender los asuntos sometidos a estudio del juzgado vinculado dentro de los límites del artículo 4 de la ley 270 de 1996, modificado por el artículo 1° de la ley 1285 de 2009, según el cual la administración de justicia debe ser pronta, cumplida y eficaz a fin de evitar inconformidades en los usuarios de la administración de justicia y el ejercicio de acciones que afectan la buena imagen institucional.

Así las cosas, en el estudio del caso sometido a consideración, este Consejo no encontró mérito para considerar la existencia de una situación contraria a la oportuna y correcta administración de justicia a la luz del Acuerdo PSAA11-8716 de 2011, por parte del Juez Tercero Promiscuo Municipal de Sabanalarga - Atlántico. Toda vez que el funcionario argumenta en su favor, que el Despacho se pronunció mediante providencia de 30 de abril de 2018, dio inicio al trámite incidental, superando la situación de inconformidad planteada por el quejoso.

En consideración, a que el mencionado mecanismo administrativo de la Vigilancia Judicial Administrativa está dirigido al control de los términos procesales, en aras de velar por una administración de justicia oportuna y eficaz, este despacho pudo determinar que el Juzgado Tercero Promiscuo Municipal de Sabanalarga - Atlántico, normalizó la situación de deficiencia, dando cumplimiento a lo ordenado en el artículo 6 del Acuerdo PSAA11-8716 de 2011, por tanto no se dará apertura al trámite de la vigilancia judicial administrativa y se dispondrá el archivo de las presentes diligencias.

En consecuencia, y de conformidad con las consideraciones esbozadas en precedencia, el Consejo Seccional de la Judicatura del Atlántico,

#### RESUELVE:

**ARTÍCULO PRIMERO:** No dar apertura al trámite de vigilancia judicial administrativa por las actuaciones en el proceso 2017 - 00130 del Juzgado Tercero Promiscuo Municipal de Sabanalarga - Atlántico, a cargo del funcionario **Dr. Rafael Angel Carrillo Pizarro**, al no ser posible imponer los efectos del Acuerdo 8716 de 2011, según las consideraciones.

**ARTICULO SEGUNDO:** Comunicar al servidor(a) judicial y al quejoso de la vigilancia judicial administrativa, por correo electrónico o cualquier otro medio eficaz, de acuerdo con lo establecido en el artículo 8° del Acuerdo PSAA11-8716 de 2011.

**ARTICULO TERCERO:** La anterior decisión se expide conforme a la ley y al reglamento

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE

  
JUAN DAVID MORALES BARBOSA  
Magistrado Ponente (E)

  
CLAUDIA EXPOSITO VELEZ  
Magistrada.

